

Centro de Documentación de Honduras (CEDOH)

Web: <http://www.cedoh.org/>

FB: [cedoh.org](https://www.facebook.com/cedoh.org)

ALERTA CIUDADANA
EPIDEMIA, MILITARES Y PERSONAL DE SALUD
31 DE MARZO, 2020

EL PROBLEMA

Desde hace varias semanas, y con más intensidad en los últimos días, escuchamos las denuncias del Colegio Médico, a nivel gremial, y de connotados profesionales de la salud, a nivel particular, sobre el desabastecimiento del sistema sanitario para poder atender a los enfermos graves de COVID-19 y, lo que es más increíble, para proteger al personal de salud que se coloca en primera línea para tratar a la población contagiada, o sospechosa de contagio, que acude a los centros hospitalarios en busca de atención. La decisión del Congreso Nacional del 13 de marzo recién pasado, de aprobar actividades gubernamentales por más de 10,350 millones de lempiras para enfrentar la emergencia y otros problemas relacionados con el impacto de la epidemia -cantidad que según el gobierno ya tenía en su poder- despertó las esperanzas de que todos estos problemas se iban a resolver de forma expedita y a la menor brevedad. Para sorpresa de todos, de forma inmediata comenzaron a verse en las calles militares, personal de la Dirección de Policía de Investigación (DPI) y bomberos totalmente protegidos con trajes especiales, incluyendo mascarillas sofisticadas, mientras el personal de la salud continuaba -y todavía continúa- desprotegido, obligado a comprar sus propias mascarillas y a improvisar protección con diferentes materiales, incluidas bolsas de basura. La situación se volvió más compleja al quedar en evidencia la inexistencia de un plan de atención a la emergencia desde el punto de vista de la salud que incluyera la habilitación de hospitales o espacios dentro de los mismos y el equipamiento de áreas no hospitalarias que pudieran servir para atender la afluencia masiva de contagiados cuando se llegara a un punto crítico en la escala de las diferentes fases, sin afectar a los pacientes de otras patologías que continuarían demandando atención en salud.

EL CONTEXTO

Desde su gestión como presidente del Congreso Nacional (2010-2014) el actual gobernante en su doble período (2014-2018 y 2018-actualidad) ha evidenciado una clara tendencia a la militarización de la seguridad pública, el mantenimiento del orden y, de forma más reciente, a la militarización de otras funciones del Estado que no son competencia de los militares, como la rehabilitación del agro, la custodia de los centros educativos, la seguridad aeroportuaria, la custodia de los centros de salud y la intervención de los centros penales, entre otros.

El gobernante ha dado muestras crecientes de apoyarse en los militares, sustituyendo, inclusive, a cuadros de su propio partido con los que parece haber dejado de contar desde hace algún tiempo. En ese contexto de creciente militarización, los recursos destinados a las fuerzas armadas han ido creciendo vertiginosamente, no solamente por el equipamiento y modernización de sus pertrechos sino porque los militares le cobran al Estado cuantiosas cantidades por cada una de las funciones en que los involucran, más allá de las tradicionales de defensa de la soberanía e integridad territorial. De esta manera, al aumentar artificialmente “las necesidades” destinadas a defensa y seguridad, el gobernante ha ido aumentando porcentualmente el gasto destinado a los militares y reduciendo, con igual o mayor velocidad, el destinado a satisfacer necesidades básicas de la población como salud y educación, lo que dio lugar a fuertes movilizaciones de protesta gremial y reclamo social durante el año 2019.

En estas circunstancias, la asignación presupuestaria destinada al gasto militar ha evidenciado un desbalance visible entre los objetivos de defensa y seguridad, y los objetivos del desarrollo económico y social. Es más, los recursos presupuestarios destinados a los militares han resultado insuficientes para la magnitud de sus funciones adicionales, lo que ha motivado al gobernante a crear y utilizar para este objetivo la poco transparente tasa de seguridad que le ha permitido realizar compras cuya adquisición ha suscitado fuertes cuestionamientos por el encubrimiento de la ley de secretos, como se le conoce comúnmente, la cual fue aprobada expresamente con esa finalidad.

En este contexto, no es de extrañar la situación de calamidad en que se encuentra todo el sistema sanitario público del país. Es el resultado de una política sostenida durante toda una década de invertir más en militares y menos en escuelas y hospitales públicos; de centrarse más en la represión de la protesta social que en la atención a las necesidades básicas de la población. Tampoco es de extrañar que los primeros en ser abastecidos en esta emergencia de salud hayan sido los militares -y parcialmente los policías- porque la visión militarista ha llevado al gobernante a creer que la mejor forma de combatir el virus es colocando a los militares en las calles para contener la circulación de personas, algo en lo que han demostrado ser muy diestros en los últimos años. Todos ellos olvidaron que ante una emergencia sanitaria potenciada por la epidemia que azota al mundo como pandemia, el personal de primera línea es el personal de salud y el personal militar y policial juega un papel importante pero secundario y subordinado a la urgencia de la salud.

LAS IMPLICACIONES

Resulta impactante, inclusive para los más insensibles, escuchar los relatos, denuncias, reclamos y exigencias de médicos, pasantes de medicina, enfermeras, personal de apoyo y personal administrativo, referido a su vulnerabilidad ante el contagio y a la insuficiencia y deficiencia de los centros hospitalarios para atender con responsabilidad la gravedad de la epidemia. Lo que ha trascendido revela la dimensión del descuido y del abandono del tema de la salud en nuestro país; la desesperación de la gente, la crítica creciente y el

reclamo airado es la factura que la epidemia le pasa al gobierno por la deformada visión militarizada que hizo que hoy los militares se protejan mucho más que el personal de salud y que se consideren con los conocimientos especializados suficientes para conducir la acción estatal ante una epidemia.

LA ALERTA CIUDADANA

La situación de calamidad del sistema de salud en nuestro país y su incompetencia para enfrentar la epidemia ha trascendido públicamente y ha llegado hasta distintos sectores empresariales y sociales que empiezan a tomar conciencia de la gravedad del problema, no solo para la población más vulnerable sino para toda la población sin distinción política, social, económica o religiosa, incluidos ellos mismos. De hecho, ya han comenzado diversas empresas a donar ventiladores, respiradores, mascarillas, trajes, guantes, medicinas y otras necesidades hospitalarias, lo que obliga a la ciudadanía a estar alerta ante tres hechos puntuales:

1. Si el **GOBERNANTE** es capaz de darle un giro al manejo militarizado de la epidemia y empezar a delegar en el personal médico especializado la conducción técnica de la emergencia, con la necesaria asignación de recursos para suplir el desabastecimiento y el riesgo en que se encuentra.
2. Si los **EMPRESARIOS** son capaces de expresar su nivel de responsabilidad social y empezar a suplir las necesidades médico- hospitalarias con la prontitud y eficiencia con que dirigen sus empresas.
3. Si los **FUNCIONARIOS DE GOBIERNO, DIPUTADOS, MAGISTRADOS, ALCALDES, GOBERNADORES, DIRIGENTES POLÍTICOS Y OTROS** empiezan a asumir que son -o aspiran llegar a ser- parte del Estado y servidores públicos que deben actuar de acuerdo con las circunstancias, solidarizarse con el personal de salud y con la población más necesitada con un compromiso directamente proporcional a la magnitud de la epidemia.